



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA  
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 161442 DE 2025**

(27 de noviembre 2025)

*"Por medio de la cual se resuelve una solicitud de nulidad y revocatoria directa"*

**LA DIRECTORA DE OTRAS PRESTACIONES (E) DE LA ADMINISTRADORA DE LOS  
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y

**CONSIDERANDO**

**1. ANTECEDENTES**

- 1.1.** Que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES, mediante **Resolución No.30916 del 27 de septiembre de 2019**, impuso la obligación de pagar una suma líquida de dinero al señor **JAVIER ANTONIO MEJÍA SALCEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12686664, por un valor de DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE., (\$ 19.190.093,00, con ocasión a las reclamaciones 11279082 y 11304876 derivadas del accidente de tránsito ocurrido el día **26/01/2018** en el cual se vio involucrado el vehículo de placa **MFP58C**, de propiedad del obligado, automotor que para la fecha de los hechos, no contaba con una póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2.** Que el día 11 de octubre de 2021 se notificó mediante publicación por aviso en la página web de la entidad (<https://www.adres.gov.co/notificaciones-administrativas>) el contenido de la **Resolución No.30916 del 27 de septiembre de 2019**, al señor **JAVIER ANTONIO MEJÍA SALCEDO**, en acatamiento a lo establecido en el inciso segundo1 del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, quedando en firme y ejecutoriado el acto administrativo en mención, el 27 de octubre de 2021.
- 1.3.** Que una vez ejecutoriada la **Resolución No.30916 del 27 de septiembre de 2019**, el Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica, en uso de sus facultades legales previstas en artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, los artículos del 98 al 101 de la Ley 1437 del 2011, el Libro V capítulo II título VIII del Estatuto Tributario Nacional, numeral 4º del artículo 11 del Decreto 1429 de 2016 y el artículo 16 de la Resolución 1012 de 2022 y demás normas concordantes, mediante la **Resolución No. 1671 del 06 de junio del 2022**, libró mandamiento de pago contra del señor **JAVIER ANTONIO MEJÍA SALCEDO** previamente identificado.
- 1.4.** Que mediante radicado Orfeo No. 20256304863632 del 09 de septiembre de 2025, el señor **JAVIER ANTONIO MEJÍA SALCEDO** previamente identificado, presenta solicitud de nulidad y revocatoria directa en contra de la **Resolución No.30916 del 27 de septiembre de 2019** alegando la falta de competencia por caducidad administrativa.

**2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA**

Frente a la solicitud de revocatoria presentada se tiene que el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que: *"Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

La revocatoria es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Así mismo, en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento; adicionalmente es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, de oficio, constate la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la

Continuación de la Resolución: *"Por medio de la cual se resuelve una solicitud de nulidad y revocatoria directa"*

constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona.

Sobre el particular, la Corte Constitucional mediante **Sentencia del 18 de noviembre de 2020 (Rad. 25001-23-42-000-2014-04437-01)**, precisa sobre la revocatoria directa lo siguiente:

*"(...) En relación con la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que ocurre con los particulares, la Ley 1437 de 2011, artículo 93, establece, en forma precisa las causales que imponen a la Administración dicha revocatoria, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las siguientes: Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la Constitución o la ley, esto es, que la oposición sea grosera, de bulto, es decir, cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos administrativos, por parte de esta Jurisdicción. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraría esos intereses generales, causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de la inoportunidad o inconveniencia de aquél, vinculándose a la noción del mérito del acto administrativo. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una persona. (...) los actos administrativos de carácter particular y concreto no podrán ser revocados sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, pues dichos actos implican la creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y determinada. (...)"*

Así mismo, la **sentencia 2013-00577 de 2020** proferida por el Honorable Consejo de Estado dispuso lo siguiente: **"De la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto.**

En relación con los actos administrativos conviene recordar que se constituyen en la expresión unilateral de la voluntad de la Administración, dirigida a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal y de carácter particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o determinables.

Tanto los actos administrativos generales y abstractos como los particulares y concretos, pueden ser sustraídos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades administrativas que los proferieron, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando como expresamente lo ordena el Artículo 69 del CCA: sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley; no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él; o si con ellos se causa agravio injustificado a una persona.

Específicamente en cuanto a los actos de contenido particular y concreto, se debe precisar que la Administración puede revocarlos, bien sea de manera directa o demandando su propio acto a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, siempre y cuando se configuren las causales anteriormente descritas de que trata el Artículo [69](#)".

En relación con el debido proceso, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010, ha señalado que el mismo no solo aplica al procedimiento judicial sino también a todas las actuaciones administrativas, y con ello a todo el actuar de la administración pública: *"... la Constitución extiende la garantía del debido proceso no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas. Ello significa, que el debido proceso se mueve también "dentro del contexto de **garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública**, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses".* (Negrilla y subrayado fuera de texto).

El Consejo de Estado- Sala de lo Contenciosa Administrativa- Sección Cuarta de 25 de octubre de 2017 se pronunció sobre las modalidades de revocatoria directa en la **Sentencia 73001-23-31-000-2008-00237-01** señalando lo siguiente:

*"(...) No obstante, del examen de la normativa positiva que la regula (artículos 69 a 74 del Código Contencioso Administrativo) se puede concluir que tiene dos modalidades: de un lado, como mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo*

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de nulidad y revocatoria directa"

*produjo o ante su inmediato superior y, de otro, como medida unilateral de la Administración para dejar sin efecto decisiones adoptadas por ella misma. En el segundo caso, es un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de la vía gubernativa, del que puede hacer uso la Administración de manera oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos. Es, en efecto, un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de revisar sus propias actuaciones y, dentro del contexto de la actuación oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas". Mediante esta figura, la Administración, de oficio o a solicitud de parte, deja sin efecto los actos administrativos expedidos por ella misma, por las causales y conforme con el trámite consagrado en la ley." (Negrilla y subrayado fuera de texto)*

### 3. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA

Esta Dirección procede a estudiar la solicitud del señor **JAVIER ANTONIO MEJÍA SALCEDO**, donde señala:

*"Que, dado que fue imposible efectuar la notificación personal de los actos administrativos por la razón anteriormente expuesta, decidieron publicar la notificación por aviso de la resolución número 30916 del 27 de septiembre de 2019, teniendo como fecha de fijación el día 04 de octubre de 2021 y fecha de desfijación el día 08 de octubre de 2021, en ese sentido, el acto administrativo obtendría firmeza y ejecutoriedad a partir del día 27 de octubre de 2021, siendo que para esta fecha había operado la FALTA DE COMPETENCIA POR CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. 1.6. Que, si bien la ADRES cuenta con la facultad de ejercer recobros por vía administrativa al propietario o conductor del vehículo, actúa de forma temeraria al no verificar si la dirección suministrada por las entidades reclamantes obedece a la del propietario o conductor del vehículo, de ahí que se desprendan violaciones a los derechos fundamentales de los administrados, como en el caso sub examine, en el que se puede avizorar una abrupta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, como también de los principios de publicidad, contradicción y defensa, los cuales gozan de una especial acogida dentro de los procedimientos administrativos.(...)"*

Razón por la que solicita:

*"Teniendo en cuenta que el acto administrativo por medio del cual se hace el recobro, debió ser expedido y notificado, dentro de los dos (2) años siguientes contados a partir del 24 de septiembre de 2018, y que además, en virtud de los principios de finalidad y necesidad, su despacho cuenta con la facultad de acceder a información que le permitiera corroborar la información suministrada por la entidad reclamante, evitando así la vulneración de mis derechos fundamentales, como también la transgresión a los principios que enmarcan la función administrativa, solicito que:*

*3.1. Se anule, revoque y/o se deje sin efectos la resolución número 30916 del 27 de septiembre de 2019, teniendo en cuenta que la misma, para cuando presuntamente tomó carácter de firmeza y ejecutoriedad ya había operado la FALTA DE COMPETENCIA POR CADUCIDAD ADMINISTRATIVA, dado que no fue notificada dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se hizo exigible dicho pago, es decir, el 24 de septiembre de 2018.*

*3.2. Se ordene el archivo del procedimiento administrativo cobro coactivo y se levanten las medidas cautelares emitidas en mi contra."*

### 4. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Sea del caso recordar, que por expresa disposición del artículo 48 de la Constitución Política, corresponde al Estado garantizar la seguridad social y la vida de sus ciudadanos. En este sentido, cuando las personas que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional y sus respectivos beneficiarios cuando se produce el fallecimiento, tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños causados por el vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza, **o con cargo a la Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o no identificados.**

Es así que, todos los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y

Continuación de la Resolución: "*Por medio de la cual se resuelve una solicitud de nulidad y revocatoria directa*"

previsión social del sector salud, están obligados a prestar la atención médica en forma integral a las víctimas de accidentes de tránsito, considerando el grado de complejidad de la atención que requiera el accidentado y que una vez suministrada la atención médica por una clínica u hospital, éstos están facultados para cobrar directamente a la compañía aseguradora que expidió el SOAT - si el vehículo cumple con la obligación de estar amparado con la póliza de seguro obligatorio, por los costos de los servicios de salud prestados hasta por los montos de cobertura fijados por las disposiciones legales pertinentes y **al FOSYGA - Subcuenta ECAT, si el vehículo carece de póliza de seguro obligatorio SOAT, o no ha sido identificado o superados los topes en lo que faltase.**

La facultad del FOSYGA hoy la ADRES, según la cual se entiende subrogado para cobrar las atenciones referidas, procede en contra del propietario del vehículo que incumplió su obligación de adquirir el seguro obligatorio SOAT, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 056 de 2015, compilado en el artículo 2.6.1,4.3.14 del Decreto 780 de 2016, vigente para accidentes ocurridos después del 3 de mayo de 2015, el cual señala:

*"Repetición. podrá repetir el pago realizado a las víctimas accidentes de tránsito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el Fosyga se entiende subrogado en los derechos de quien hubiere recibido cualquier suma de la Subcuenta ECAT de dicho Fondo por concepto de pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, con ocasión del incumplimiento del propietario del vehículo de la obligación de adquirir el SOAT. No obstante, la persona que conducía el vehículo no asegurado al momento del accidente será solidaria por todo concepto de responsabilidad que le asista al propietario del vehículo por cuenta del incumplimiento de la obligación de adquirir el SOAT. En estos casos, el Fosyga adelantará las acciones pertinentes contra el propietario del vehículo para la fecha del accidente, encaminadas a recuperar las sumas que haya pagado por los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo y contra el conductor si lo estima pertinente". (Lo subrayado es fuera de texto).*

Sobre el particular, es necesario reiterar, lo señalado en la **Resolución No.30916 del 27 de septiembre de 2019**, en el sentido de informar que, el cobro de la obligación endilgada tiene fundamento en el artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el artículo 106 del Decreto 2106 de 2019, el cual facultó al Ministerio de Salud y Protección Social, para ordenar, mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a favor del entonces FOSYGA, hoy la ADRES, correspondiente a las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Nación -FOSYGA, con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento **de quien ostenta la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT vigente.**

En conclusión, cuando en un accidente de tránsito se encuentre involucrado un vehículo que no cuente con Seguro Obligatorio de Tránsito vigente, los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización a los que haya lugar, por principio de inmediatez son asumidos por el Estado, con cargo a la **Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES**, para lo cual solo es necesario los siguientes elementos de acuerdo con la normatividad vigente:

- a) Existencia de un accidente de tránsito el cual se acredita con la declaración del médico de urgencia sobre el hecho
- b) No contar con la póliza SOAT
- c) Existencia de víctimas

Situación está que se configura a cabalidad en el presente asunto conforme a los documentos que obran en el expediente de reclamaciones y que demuestran la existencia del accidente de tránsito ocasionado el día **31/03/2018** y del cual el reconocimiento y pago por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización, se adelantó dentro de los términos y condiciones establecidas en el artículo 73 de la ley 1753 de 2015, dando como resultado que, al entonces FOSYGA hoy ADRES, pagara las reclamaciones generadas por el precitado accidente, contenida en el acto administrativo recurrido, es por ello que se adelantó el proceso de cobro en contra del señor **MEJÍA SALCEDO**, propietario para la fecha del siniestro del vehículo automotor involucrado, calidad que no desvirtúa en la solicitud de revocatoria presentada. Así mismo, se encuentra acreditado que el vehículo de placa **AZR13B** carecía de SOAT vigente al momento de la ocurrencia del siniestro vial.

Dicho lo anterior, de cara a los argumentos esbozados por la parte solicitante, esta Dirección manifiesta:



Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de nulidad y revocatoria directa"

4.1 DE LA SOLICITUD DE NULIDAD POR LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO

De cara a la solicitud de nulidad propuesta por el señor MEJÍA SALCEDO se señala que, esta no resulta viable toda vez que dicha solicitud debe ser elevada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo\_

"ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas privadas sujetas a este régimen del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas. (...)"

Reiterando que la Resolución Número 0000948 de 2024 y la Resolución número 45446 de 2024 se encuentran debidamente ejecutoriadas y cuentan con presunción de legalidad conforme con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011:

"Presunción de legalidad del acto administrativo: Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar". (Sombreado fuera del texto original).

En el mismo sentido el artículo 89 de la precitada norma determinó:

"Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional". (Sombreado fuera del texto original).

Ahora bien, frente a la presunta vulneración al debido proceso bajo el argumento de que la notificación fue efectuada a una dirección distinta a la informada en el RUT, es menester preciar que en aras de garantizar derechos fundamentales como el debido proceso y la defensa del deudor, esta Entidad remite las comunicaciones, citaciones y demás documentos surgidos en la etapa administrativa a los datos de contacto suministrados por las IPS que brinda los servicios de salud a la(s) víctima(s) de los siniestros viales:

V. DATOS DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO											
MEJIA						SALCEDO					
1er Apellido						2do. Apellido					
JAVIER						ANTONIO					
1er Nombre						2do. Nombre					
Tipo de Documento						No. Documento					
[C][E][P][A][N][I][T][I][R][C]						[1][2][6][8][6][6][5][4]					
Dirección Residencia						Cod. 2 0 Teléfono					
[C][L][L][E][2][4][N][2][1][3][0]						[0][6][0]					
Departamento						Cod. 0 6 0					
[C][E][S][A][R]											
Municipio Residencia											
[B][O][S][C][O][N][I][A]											

Así las cosas, la citación para la notificación personal de la Resolución No.30916 del 27 de septiembre de 2019 fue remitida a la calle 24 No, 21 -30 en el municipio de Bosconia- Departamento Cesar:



La salud es de todos



S119101811191042081000003520400  
Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 0000035204  
Fecha: 18/11/2019  
Página 1 de 1

OAJ-GN-12686664-2019-P-665  
Bogotá D.C.,

Señor(a):  
JAVIER ANTONIO MEJIA SALCEDO  
CLLE 24 # 21 - 30  
BOSCONIA - CESAR

ASUNTO: CITACIÓN para Notificación Personal Resolución No. 30916 del 27 de septiembre de 2019.

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de nulidad y revocatoria directa"

En atención a que la citación para la notificación personal no pudo ser entregada, y en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, que establece: "Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.", la Adres publicó la citación para notificación personal de la mencionada resolución en la página web de la entidad (<https://www.adres.gov.co/notificaciones-administrativas>):



La Oficina Asesora Jurídica de la ADRES, en cumplimiento de lo dispuesto por el Título III - Capítulo V de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, procede a comunicar citación de notificación personal y/o notificar por aviso el contenido de los actos administrativos, mediante la publicación en la página web de ADRES, en acatamiento con lo establecido en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
Para mayor información comuníquese al teléfono 4322760 Extensiones 1010, 1017, 1018, 1021, 1022 y 1023.

Documento de identidad: 12066664

Número Documento		Número Notificación
Defensor	12066664	12066664_RESOL_30916DEC2019.pdf
Defensor	12066664	12066664_AVSORRESOL_1671DE2022.pdf
Defensor	12066664	12066664_AVSORRESOL_30916DEC2019.pdf
Defensor	12066664	12066664_CITACION_1671DE2022.pdf

Así mismo, ante la imposibilidad de realizar la notificación personal del mencionado acto administrativo, conforme al artículo 73 de la misma norma, se procedió a la publicación en la página web de la ADRES de la notificación por aviso de la de la **Resolución No.30916 del 27 de septiembre de 2019**, fijada el 04 de octubre de 2021 y desfijada el 08 de octubre de 2021:

**NOTIFICACIÓN POR AVISO  
(ARTÍCULO 69 LEY 1437 DE 2011)**

**EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

**MANIFIESTA:**

Que, a la luz de lo establecido en el artículo primero de la resolución 2433 de 2020, se suspendieron los términos de las actuaciones administrativas que cursaban en la ADRES, mientras permaneciera vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que, conforme a lo contemplado en el artículo quinto de la resolución 552 de 2021, que entra en vigencia a partir del 14 de mayo de 2021, se reanudarán los términos de las actuaciones administrativas que estaban suspendidas en virtud de la resolución 2433 de 2020.

Que en prevalencia de los derechos al debido proceso y de defensa y contradicción de que son titulares las personas naturales y jurídicas, y ante la imposibilidad de realizar la notificación personal o por aviso, no obstante haberse surtido el trámite regulado en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, en acatamiento con lo establecido en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a la notificación por AVISO a través de la página web de la ADRES (<https://www.adres.gov.co/notificaciones-administrativas>), de la Resolución **No. 30916 del 27 de septiembre de 2019**, "Por la cual se ordena un cobro derivado del pago de las reclamaciones reconocidas y pagadas por el entonces FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA- FOSYGA hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES" y/o "Por la cual se ordena un cobro derivado de las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Se advierte que contra la citada providencia objeto de publicación, procede el Recurso de Reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante la Oficina Asesora Jurídica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social - ADRES, dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la fecha del surtimiento de la presente notificación, en los términos del Título III - Capítulo VI, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que el presente Aviso de acuerdo con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, permanecerá fijado por el término de cinco (05) días hábiles, con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la desfijación del aviso.



**JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ**  
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) - ADRES

Fecha de Fijación: 04 de octubre de 2021

Fecha de Desfijación: 08 de octubre de 2021

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de nulidad y revocatoria directa"

### Notificaciones administrativas

La Oficina Asesora Jurídica de la ADRES, en cumplimiento de lo dispuesto por el Título III - Capítulo V de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, procede a comunicar citación de notificación personal y/o notificar por aviso el contenido de los actos administrativos, mediante la publicación en la página web de ADRES, en acatamiento con lo establecido en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Para mayor información comuníquese al teléfono 4322760 Extensiones: 1010, 1017, 1018, 1021, 1022 y 1023.

Documento de identidad: 12686664

Buscar

	Numero Documento	Numero Notificación
Defensor	12686664	12686664_RESOL_3011DEC2019.pdf
Defensor	12686664	12686664_AYISORESOL_1671DEC2021.pdf
Defensor	12686664	12686664_AYISORESOL_3011DEC2019.pdf
Defensor	12686664	12686664_CITACION_1671DEC2022.pdf

Acorde a las razones expuestas en los párrafos anteriores, se deja de presente que, el actuar de la ADRES se encuentra ceñido a lo ordenado por las normas propias del proceso de determinación del deudor adelantado contra del convocante, precisando que, en prevalencia del principio de publicidad y en salvaguarda del debido proceso y demás derechos que le asisten al obligado, se adelantó la notificación por publicación del aviso en la página web de la Entidad, pues al presentarse una devolución en la dirección suministrada por parte de la IPS para ser notificado de manera física, aquella goza por mandato de la ley de la facultad para dar a conocer el acto administrativo por el mecanismo empleado en el caso en concreto.

Por lo anterior, la actuación administrativa desplegada por la ADRES, se ha surtido de acuerdo con las disposiciones normativas establecidas en la Ley 1437 del 2011, obrando de manera diligente y respetando los derechos al debido proceso, defensa y contradicción que le asisten al obligado.

4.2 DE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

De cara al argumento presentado por la parte recurrente frente a la caducidad, es preciso señalar que la Administradora de los Recursos del Sistema General en Salud ADRES, adelanta la correspondiente actuación administrativa de cobro, una vez que, las IPS que prestaron los respectivos servicios de salud y atención hospitalaria o las beneficiarias reclamantes por indemnización por muerte y gastos funerarios , remitan a esta entidad los respectivos formularios de ocurrencia del accidente, gastos generados, personas involucradas etc. para la cancelación de dichas acreencias.

Al respecto de la presentación de las reclamaciones, el Decreto 1281 de 2002<sup>1</sup> estableció:

**"Artículo 13. Términos para cobros o reclamaciones con cargo a recursos del Fosyga.** Sin perjuicio de los términos establecidos para el proceso de compensación en el régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud, con el fin de organizar y controlar el flujo de recursos del Fosyga, cualquier tipo de cobro o reclamación que deba atenderse con recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga deberá tramitarse en debida forma ante su administrador fiduciario dentro de los seis meses siguientes a la generación o establecimiento de la obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda. En consecuencia, no podrá efectuarse por vía administrativa su reconocimiento con posterioridad al término establecido". De igual forma estableció que: "La reclamación o trámite de cobro de las obligaciones generadas con cargo a los recursos del Fosyga, antes de la entrada en vigencia del presente decreto, deberán presentarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de este decreto".

Siendo dicha norma modificada por el artículo 111 del Decreto 019 de 2012 y posteriormente por el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015 de la siguiente manera:

<sup>1</sup> Modificado por el artículo 111 del Decreto Ley 019 de 2012

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de nulidad y revocatoria directa"

TÉRMINO	NORMA	VIGENCIA
1 año	Artículo 111 del Decreto Ley 019 de 2012	Para aquellos casos en que se generó el derecho a reclamar ante el FOSYGA entre el 10 de enero de 2012 y el 8 de junio de 2015.
3 años	Artículo 73 de la Ley 1753 de 2015	Para aquellos casos en que se generó el derecho a reclamar ante el FOSYGA desde el 9 de junio de 2015.

En ese sentido, los formularios que deben ser sometidos a un proceso de revisión y verificación en atención al cúmulo de reclamaciones que diariamente son reportadas, deben ser auditadas y efectivamente pagadas a la respectiva IPS y es entonces solo a partir de la fecha efectiva de giro o desembolso de los recursos, que esta entidad tiene la facultad de iniciar el cobro de dichas acreencias, repitiendo contra quienes teniendo la obligación de contar con el seguro obligatorio hicieron caso omiso de la norma.

Así las cosas, al momento en que las IPS efectúan la radicación de las reclamaciones ante la Entidad que para el caso en concreto contaba con 3 años, en cumplimiento de lo preceptuado en la Resolución 1645 de 2016 y la ley 1753 de 2015, esta administración efectúa la auditoria de las reclamaciones que son presentadas por las diferentes entidades reclamantes, con el propósito de validar el cumplimiento de los requisitos mínimos, y necesarios para corroborar la información del siniestro ocurrido; es por ello que, frente a la reclamación fundamento de la obligación que recae a nombre de la obligada, esta administración realizó el respectivo trámite de auditoria una vez radicada, de la cual se constataron las condiciones necesarias y se procedió a su aprobación y posterior pago a la entidad reclamante.

Dicho lo anterior, en cuento al argumento expuesto por la recurrente, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 114 del Decreto 019 de 2012 que disponía: "El cobro de los créditos a favor del FOSYGA correspondientes a las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Nación – Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA con ocasión de los daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento de la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT vigente, estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social quien mediante acto administrativo ordenará el cobro y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva a través de procedimiento administrativo de cobros coactivos" legislación que estuvo vigente desde el 10 de enero de 2012 hasta el 21 de noviembre de 2019, es decir, para el caso bajo estudio, dicha norma se encontraba vigente al momento del giro efectuado respecto de las reclamaciones 11445623 y 11412973, los cuales fueron realizados el 24/09/2018, razón por la cual no se puede predicar la existencia de caducidad y por ende, no hay lugar a acceder a las pretensiones del recurrente.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Dirección,

RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR** en todas sus partes la **Resolución No.30916 del 27 de septiembre de 2019**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR** al señor **JAVIER ANTONIO MEJÍA SALCEDO** identificado con CC No. **12686664**, el contenido de la presente resolución, conforme lo establecen los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección física y/o electrónica	Ciudad
JAVIER ANTONIO MEJÍA SALCEDO	<a href="mailto:martinguetteospino@gmail.com">martinguetteospino@gmail.com</a> <a href="mailto:julianmj1999@gmail.com">julianmj1999@gmail.com</a>	N/A

**ARTÍCULO TERCERO:** Comunicar la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

**ARTÍCULO CUARTO:** Comunicar la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica – Cobro Coactivo - para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.





## RESOLUCIÓN NÚMERO 161442 DE 2025

HOJA No. 9 de 9

Continuación de la Resolución: *"Por medio de la cual se resuelve una solicitud de nulidad y revocatoria directa"*

**ARTÍCULO QUINTO:** Advertir que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los (27) días del mes de noviembre de 2025.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por  
Yasmín Escamilla B.  
Directora (E) de Otras Prestaciones

**YASMÍN ESCAMILLA B.**

Directora (E) de Otras Prestaciones

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud  
(SGSSS) – ADRES

Revisó: Rafael Roa - Contratista  
Elaboró: Lautia Gomez – Contratista  
Expediente: CC 12686664- JAVIER ANTONIO MEJÍA SALCEDO